

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C, siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Ref. 11001 4003 019 2019 01083 00

I. ASUNTO A TRATAR

Procede el despacho a proferir sentencia dentro del proceso ejecutivo singular promovido por LATORRE V Y CIA LTDA contra VICTOR MANUEL CASTRO ROMERO.

II. ANTECEDENTES

Pretensión

LATORRE V Y CIA LTDA instauró demanda ejecutiva singular de menor cuantía contra VICTOR MANUEL CASTRO ROMERO, con el fin de obtener el pago de la suma de \$50.511.264 m./cte, correspondiente al valor de los cánones de arrendamiento vencidos y no pagados desde abril de 2016 a diciembre de 2018, junto con los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia Financiera, a partir de la fecha de exigibilidad de cada uno de ellos hasta que se verifique el pago total de lo adeudado y los cánones de arrendamiento que en lo sucesivo se causen desde la presentación de la demanda hasta cuando se pague la obligación en su totalidad. (fl. 17 a 21, c.1).

Fundamentos fácticos

Para fundamentar sus pretensiones la parte actora adujo en síntesis que:

1. El día 1 de julio de 1992 Pablo Enrique Latorre Vargas arrendó a Víctor Manuel Castro Romero, el inmueble ubicado en la Carrera 20 No. 8 A 16 Local Comercial No. 407, quien se obligó a pagar inicialmente la suma de \$27.000 m./cte. por concepto de canon de arrendamiento el cual se incrementó conforme al aumento establecido en el contrato de un 35% anual a partir del año siguiente.

2. El 2 de marzo de 2002 mediante documento privado el arrendador cedió el contrato a LATORRE V Y CIA LTDA., de la cual es socio, y el demandado continuó pagando los cánones de arrendamiento en la forma y términos convenidos hasta el mes de marzo de 2016 reconociendo tácitamente como arrendador a la sociedad demandante.

3. Indicó que a partir de abril de 2016, el arrendatario no volvió a pagar la renta a que estaba obligado conforme el documento privado suscrito por las partes.

III. ACTUACIÓN PROCESAL

1) Mediante auto adiado 23 de enero de 2020 se libró mandamiento de pago a favor de LATORRE V Y CIA LTDA y en contra del demandado por las sumas de: **i)** \$50.511.264 m/cte por concepto de cánones de arrendamiento vencidos y no pagados desde abril de 2016 a diciembre de 2018, **ii)** intereses moratorios sobre los cánones de arrendamiento, de acuerdo a la fluctuación periódica que para el efecto expida la Superintendencia Financiera de Colombia, hasta que se verifique el pago total de lo adeudado y **iii)** cánones que en lo sucesivo se causen desde la presentación de la demanda hasta cuando se pague la totalidad de la obligación (fl.31 c.1).

2) El demandado Víctor Manuel Castro Romero se notificó en debida forma a través de curador *ad-litem*, quien dentro del término legal se opuso a las pretensiones del libelo formulando como excepciones las denominadas: **i) “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA”** la cual fundamentó en que la titularidad del contrato base de la presente acción en calidad de arrendador se encuentra en cabeza de Pablo E Latorre V y no LATORRE V Y CIA LTDA y aunque los hechos de la demanda la parte actora hizo referencia a una cesión de contrato, ésta no se acreditó y su respectiva notificación al arrendatario lo que implica que la sociedad demandante no sea la llamada a ejercer la acción ejecutiva que se intenta mediante este proceso y **ii) “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA”** argumentando que la presentación de la demanda no interrumpió el fenómeno prescriptivo pues de conformidad con lo normado en el artículo 94 del C.G.P. el mandamiento de pago proferido el 23 de enero de 2020, no se notificó al extremo demandado dentro del año siguiente sino hasta 1 de julio de la presente anualidad por tanto no hay lugar a exigir el cobro por los meses de abril a junio de 2016.

3) De las excepciones propuestas se corrió traslado a la parte actora quien dentro del término legal concedido guardó silencio.

IV. PROBLEMA JURÍDICO

Observa el despacho que el problema jurídico en el presente asunto radica en determinar si las excepciones planteadas por la parte ejecutada tienen la virtualidad de enervar en todo o en parte el mandamiento de pago librado.

V. CONSIDERACIONES

1. Cumple precisar que se reúnen a cabalidad los denominados presupuestos procesales necesarios para la normal configuración y trámite del litigio, a saber, la capacidad de las partes, demanda en forma y competencia del Juzgado, obran en el expediente y no se observa causal de nulidad alguna que conlleve a invalidar lo actuado en todo, o en parte, pues se advierte que los diferentes actos procesales se adelantaron con arreglo a las normas que los gobiernan.

La acción promovida por LATORRE V Y CIA LTDA es la EJECUTIVA SINGULAR, consagrada artículo 422 y subsiguientes del Código General del Proceso, cuya finalidad jurídica se orienta a obtener el cumplimiento de una prestación contenida en un documento que provenga del deudor o su causante y que emerja de manera clara, expresa y exigible, para lo cual es necesario que quien la promueve aporte con el libelo introductor un instrumento que cumpla con tales características.

En ese sentido, en cuanto al primer requisito para que un documento pueda ser considerado título ejecutivo, es decir, la **claridad**, implica que la obligación en él contenida se encuentre estructurada de forma lógica, racional y precisa, de manera que, exista plena certeza respecto del objeto de la prestación y de los individuos intervinientes, la persona que se encuentra obligada a cumplir, así como, aquel en favor de quien se ejecutará la misma.

Frente al presupuesto de **expresividad**, éste consiste en que el contenido del documento debe ser entendible sin que haya lugar realizar una interpretación más allá de la información plasmada en el cuerpo del título basándose en suposiciones o presunciones que den cuenta de la existencia o condiciones de la obligación y finalmente, **la exigibilidad** determina que la obligación pueda ser cobrada por cuanto debe incorporar la forma de vencimiento estando ligada íntimamente al plazo y la condición.

En tal sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el estudio de una acción constitucional, con relación a este tópico precisó:

“La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda

respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.

La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida.”¹ (énfasis del despacho).

2. En aras de satisfacer tal exigencia, el extremo demandante aportó con el libelo introductor el contrato de arrendamiento del local comercial ubicado en la Carrera 20 No. 8 A 16 Puesto No. 407 de Bogotá, suscrito el 1° de julio de 1992 entre PABLO E LATORRE V en calidad de arrendador y VÍCTOR MANUEL CASTRO ROMERO como arrendatario (fls. 3, c.1.), en virtud del cual, los demandados se obligaron a cancelar inicialmente la suma \$27.000 m./cte por concepto de canon mensual, pagaderos dentro de los cinco (5) primeros días de cada mensualidad.

Respecto del término de vigencia, se estipuló que el mismo sería de doce (12) meses contados a partir de la fecha de celebración y, en caso de prorroga las partes acordaron un reajuste al canon de arrendamiento de manera anual equivalente a 35% (fls.3, c.1.), documento, que cumple a cabalidad con los requisitos consagrados en el citado artículo 422 del Código General del Proceso y acredita la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo del demandado, amen que constituye el documento idóneo para ejercer el cobro de las sumas derivadas del contrato de arrendamiento en los términos del artículo 14 de la Ley 820 de 2003.

3. Ahora bien, procede el despacho a abordar el estudio de la excepción de **FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA** alegada por el extremo ejecutado, que consiste en ser la persona, que de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda, es decir, ser sujeto activo o pasivo de dicha relación de manera tal que le legitime para intervenir en el proceso iniciado.

Tal facultad o poder no se refiere al derecho sustancial en sí, sino únicamente a la posibilidad de recurrir, afirmando tener derecho de algo o sobre algo e imputando que otro (el demandado) es el llamado a satisfacer su pretensión.

¹ CSJ, Sala de Casación Civil y Agraria STC3298-2019, M.P. Luis Armando Tolosa

Al respecto nuestra H. Corte Suprema de Justicia, expresó: *“La legitimación en la causa, según concepto de Chiovenda acogido por la Corte, “consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva)” (Instituciones de Derecho Procesal Civil 1.185). Conviene desde luego advertir, como ya lo ha dicho esta Sala que cuando el maestro italiano y la Corte hablan de “acción” están empleando el vocablo como sinónimo de “Derecho de pretensión” que se ejercita frente al demandado. “Para que esa pretensión sea acogida en la sentencia es menester entre otros requisitos que se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado. De donde se sigue que lo concerniente a la legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del derecho procesal, razón por la cual se ausencia no constituye impedimento para desatar el fondo del litigio sino motivo para decidirlo en forma adversa al actor”.*

En primer lugar, debe advertir el despacho que la controversia objeto de estudio se circunscribe en el ámbito de una relación de carácter contractual respecto de un local comercial, por tanto, de conformidad con lo normado en el artículo 822 del Código de Comercio, es dable aplicar las disposiciones consagradas en la legislación civil en torno al contrato de arrendamiento y su ejecución.

4. Preciado lo anterior, en lo que tiene que ver con con la cesión del contrato cumple precisar que por vía jurisprudencial se ha determinado que **“consiste en el acuerdo mediante el cual el estipulante de una convención le transfiere a otro la posición que le corresponde dentro de ella. Dicho convenio crea un vínculo jurídico entre cedente y cesionario y, por ende, sólo requiere la voluntad de éstos para su perfeccionamiento”**², siendo así, en los términos del artículo 887 del estatuto comercial dicha figura también es aplicable a los contratos de ejecución periódica o sucesiva tales como el arrendamiento, en los cuales el tercero llamado cesionario sustituye al arrendador en los derechos y obligaciones que le asisten con relación al contrato suscrito.

Sobre este punto el tratadista Hildebrando Leal Pérez en comentarios a la citada norma del Código de Comercio, señaló:

“En la cesión de contrato, el contratante cedente es sustituido por un tercero (cesionario), “la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato”. La figura aplica a contratos de ejecución periódica, sucesiva o prolongada en el tiempo (...). Por su virtud, el tercero cesionario adquiere del contratante cedente la posición o situación jurídica que le corresponde, sustituyéndolo en la totalidad o en un segmento de las relaciones jurídicas (cas. civ. Sentencias del 23 de enero de 1943, LV, p. 10; 11 de octubre de 1945, LIX 718; 22 de agosto de 1946, LXI 19; 29 de mayo de 1942, LIV 107; 24 de marzo de 1943, LV, 238; 28 de julio de 1960, XCIII, 114). No se trata de una cesión de crédito, acción, pretensión o derecho, sino de toda o parte de la relación jurídica emanada del contrato y,

² Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de julio de 2012. Exp. No. 110131030261998-21524-01. M. P. Fernando Giraldo Gutiérrez.

por consiguiente, de la posición de contratante, en tanto el cesionario sustituye al cedente en los derechos y obligaciones, adquiere la calidad de acreedor y deudor”³

Para que la cesión del contrato pueda surtir efectos respecto del contratante cedido y terceros es menester realizar la notificación o que se produzca aceptación por parte de éstos, actividad que permite que el actor ostente la condición de legitimado en la causa, dada la oponibilidad de la cesión al demandado, materia que constituye un presupuesto de orden sustancial para el éxito de las pretensiones que se hagan valer por el sujeto en cuyo favor la norma establece el derecho que se reclama, bajo el entendido que si el actor no es el titular del derecho que exige, el fallo le debe ser adverso; circunstancia que impone al juzgador, aun de manera oficiosa.

En ese orden de ideas, la ausencia de notificación de la cesión de la posición contractual, conduce a la declaración de la falta de legitimación en la causa por activa, pues mientras ello no ocurra dicho negocio jurídico le es inoponible al contratante cedido y por tanto no surte efectos de ninguna naturaleza, *“en razón a que a éste le asiste un legítimo interés en conocer la misma y en particular la identidad de quien asumirá los compromisos adquiridos por la persona con cual negoció; además, tal comunicación apareja la oponibilidad frente a terceros”⁴*, sin que ello implique que cuando se hace referencia a aceptación por parte del negociante cedido ésta tenga que hacerse de forma expresa o que signifique un requisito para la validez del contrato.

5. Conforme a las anteriores precisiones, revisadas el material probatorio obrante al interior del asunto, de entrada advierte el despacho que se encuentra acreditada la legitimación en la causa en cabeza de LATORRE V Y CIA LTDA, puesto que si bien a los anexos de la demanda no se acompañó el documento contentivo de la cesión del contrato de arrendamiento que el arrendador Pablo E Latorre e Hijos Ltda efectuó en favor de la aquí demandante y su efectiva comunicación al arrendatario conforme a lo narrado en el hecho 4º del libelo introductor, lo cierto es que, se aportó al informativo copias de varias facturas de venta expedidas a favor del señor Víctor Manuel Castro Romero que dan cuenta de los pagos realizados por concepto de cánones de arrendamiento a la sociedad aquí ejecutante (fls 5 a 14), las cuales no fueron desconocidas ni tachadas de falsas por parte del extremo pasivo del litigio y por tanto gozan de pleno validez probatoria.

Así las cosas, se concluye que el arrendatario aceptó de forma tácita la cesión del contrato de arrendamiento y tenía pleno conocimiento de la transmisión de la posición contractual que se hiciere a la demandante LATORRE V Y CIA LTD,

³ Comentarios al artículo 887 del Código de Comercio, Hildebrando Leal Pérez, Leyer Editores, Edición 2021, pag. 589.

⁴ *Ibíd.*

tanto es así que, después del perfeccionamiento de ese negocio jurídico continuó con el cumplimiento de sus obligaciones cancelando los valores por concepto de renta a la parte actora, de ahí que la excepción formulada esté llamada al fracaso.

6. De otro lado, verificada la legitimación en la causa por activa pasa el despacho a pronunciarse frente a la excepción propuesta por la parte demandada, **“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA”**.

Frente a tal excepción, es de advertirse que el fenómeno de la prescripción puede acogerse a través de dos conceptos diferentes, de un lado como un modo adquirir el dominio de las cosas pues en virtud de la posesión por un período determinado y con el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, se obtiene el derecho real de los bienes ajenos corporales, raíces o muebles que se encuentran en el comercio humano, de otro lado, como una forma de extinguir las acciones y derechos personales, cuando éstos no se han ejercido en un lapso considerable determinado por el legislador, denominándose **prescripción extintiva o liberatoria** sin que ello implique que se encuentre en discusión la titularidad de las cosas. De manera que para que sea aplicable la figura en comento se requiere **i)** El transcurso del tiempo, **ii)** inactividad del acreedor, **iii)** alegarse expresamente, pues no opera de oficio sino a solicitud de parte **iv)** que no se haya renunciado, suspendido o interrumpido el término de prescripción, sobre el particular la Corporación en cita ha señalado que:

“La prescripción liberatoria o extintiva de derechos personales es un modo de extinguir los derechos y las acciones a consecuencia del transcurso de un lapso predeterminado en la ley, sin que el titular de esos derechos y acciones los haya ejercido. Su consolidación se supedita a que la acción sea prescriptible, que es la regla general, a que transcurra el tiempo legalmente establecido teniendo en consideración la interrupción y suspensión de que puede ser objeto; y a que el titular del derecho de acción se abstenga en ese tiempo de ejercer el derecho en la forma legalmente prevenida.

La prescripción extintiva puede ser de largo o corto tiempo, y sobreviene con el cumplimiento de los requisitos mencionados, pero al paso que la primera exige el transcurso de diez años (en el caso de la ordinaria y cinco en la ejecutiva la segunda)”⁵

Bajo esta perspectiva en punto de la materialización de la prescripción es menester que concurren tres sujetos pues se itera no opera de pleno derecho siendo menester alegarla en el transcurso del proceso. Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia 091 de 2018 precisó:

“La prescripción extintiva ante la Jurisdicción Ordinaria requiere, para su configuración, la participación de tres sujetos: el acreedor o titular del derecho que no exigió su cumplimiento o ejecución a tiempo, el deudor o sujeto pasivo de la relación jurídica que alegó la ocurrencia

⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil SC6575-2015 M.P. Jesús Vall de Ruten Ruiz.

de la prescripción como excepción y así se opuso a su realización y el juez que la declaró en la sentencia. La falta de la participación de cualquiera de los tres sujetos, impide la configuración de la prescripción.”

Ahora como se expresó en líneas precedentes, el término prescriptivo es susceptible de interrupción o renuncia, eventos en los cuales el lapso que había comenzado a transcurrir se suprime y la misma no puede consumarse debiendo iniciarse un nuevo periodo, es decir se revive nuevamente la acción cambiaria en cabeza del acreedor.

Una de las formas de borrar el término prescriptivo que ha corrido y, por consiguiente, revivir el derecho de acción que le asiste al acreedor, es la **interrupción** que puede ser de manera civil o natura al tenor de lo dispuesto en el artículo 2539 del Código Civil acaeciendo lo primero, cuando se presenta la demanda instaurada por el acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación, y lo segundo, en el evento en que el deudor reconoce ya sea expresa o tácitamente la obligación a su cargo bien porque la confiesa o hace abonos, paga intereses etc.⁶

No obstante lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 94 del Código General del Proceso para que la presentación de la demanda posea la virtualidad de interrumpir el término de prescripción, se debe realizar la intimación al demandado dentro del lapso de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación del auto admisorio al demandante o el mandamiento de pago al ejecutante, siendo así, siendo así, en los términos del artículo 2535 del Código Civil la acción ejecutiva prescribe en el término de cinco (5) años.

Sin embargo, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, en reiteradas oportunidades al interpretar las normas que regulan el término extintivo, ha señalado que dicho plazo no opera de manera automática, sino que debe observarse desde una perspectiva subjetivista, cuyo fin es el de evitar las consecuencias nocivas de demandas que se interponen con premeditada tardanza, pero también la extinción de derechos sustanciales, por causas no atribuibles a quien legítimamente los reclama, así:

“... la interrupción civil – tiene dicho la Corte- de la prescripción tanto adquisitiva como extintiva, a consecuencia de la interposición de la demanda no se consuma con la sola presentación de la demanda, sino en el momento en el que se notifica al demandado, salvo que el retardo en notificar a este no se deba a culpa del demandante, por no haber realizado la actividad necesaria para que dicha notificación se efectuara, sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del juzgado encargado de hacerla, casos estos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la

⁶ *Ibidem.*

demanda” (subrayas y negrillas fuera de texto) (G.J. números 2032, pág. 634 y 658; 2050 pág. 660; 2154, pág 132; 2318, pág. 120)”

“Es decir, que si a pesar de la diligencia del actor, el auto admisorio de la demanda no logra notificarse en tiempo a los demandados debido a evasivas o entorpecimiento de estos o por demoras de la administración de justicia o de otro tipo, que no sean imputables al reclamante, el ejercicio oportuno de la acción con la presentación de la demanda tiene la virtud de impedir que opere la caducidad. Este criterio conserva plena vigencia, por estar inspirado en los supremos ideales de justicia y equidad, adaptados al derecho objetivo, a tal punto que a pesar de la doctrina antigua consideró que el concepto de caducidad estaba ligado a la idea de plazo extintivo e improrrogable – cuyo vencimiento produce el decaimiento de la acción de manera inevitable y sin tomar en consideración la actividad del juez o de las partes-, ello no fue obstáculo para que esa noción eminentemente teórica o especulativa cediera su rigor ante los supuestos concretos que plantea la realidad que está a la base del derecho actual”¹.

De ahí que la correcta interpretación de la norma que rige el caso impone al juez la obligación de tomar en consideración las referidas circunstancias subjetivas, a fin de no endilgar a la parte demandante unas consecuencias nocivas que no le son en modo alguno atribuibles por no ser producto de su negligencia.

7. A la luz de tales derroteros, debe entrar el Despacho a determinar si en efecto operó el medio exceptivo propuesto, para lo cual, ha de tenerse en cuenta la fecha de exigibilidad de cada uno de los cánones de arrendamiento objeto de cobro, la data en que se interpuso la demanda y la fecha en que se notificó el mandamiento de pago al extremo ejecutado.

Bajo esta perspectiva, descendiendo al caso objeto de estudio se advierte que la fecha de exigibilidad del canon de arrendamiento más antiguo corresponde al **5 de abril de 2016**, de donde se colige que el término de prescripción de los 5 años de que trata el artículo 2535 en cita, en principio se cumplía el **5 de abril de 2021**.

De otro lado, se evidencia que la demanda fue presentada a reparto el 5 de diciembre de 2019 (fl. 22, C.1.), es decir, con la presentación del libelo introductor, teóricamente se interrumpió el término prescriptivo previsto en la normatividad civil siendo menester determinar el momento en que se integró el contradictorio.

Entonces, del expediente se desprende que el mandamiento de pago se notificó por estado a la parte actora el 24 de enero de 2020 (fl 31 c.1) lo que implica, que ésta contaba hasta el 24 de enero de 2021 para enterar al demandado acerca del contenido de la orden de apremio librada, a fin de lograr la interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda, circunstancia que solo se perfeccionó hasta el 2 de julio de 2021 a través de curador *ad-litem*, lo que de

suyo permite colegir que para la fecha de notificación a la parte convocada, las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento báculo de la acción correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2016, en principio ya se encontraban afectadas por el fenómeno de la prescripción, de no ser porque existen plazos que deben descontarse del mentado lapso.

En efecto, se debe tener en cuenta que debido a la emergencia sanitaria decretada por Gobierno Nacional con ocasión al virus Covid-19 se adoptaron medidas de aislamiento preventivo y concretamente en lo que tiene que ver con la administración de justicia mediante el Acuerdo PCSJA20-11517 de fecha 15 de marzo de 2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura se suspendieron los términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020, suspensión que se prolongó hasta el 30 de junio de ese mismo año cuando con la expedición del Acuerdo No PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020.

De acuerdo a lo antes descrito, en el caso de marras resulta procedente descontar el tiempo de suspensión de los términos judiciales para efectos de la configuración del fenómeno prescriptivo lo que significa que el canon más antiguo cuyo vencimiento operó el 5 de abril de 2016 prescribía el **19 de julio de 2021**, cuando ya se había hecho efectiva la notificación del mandamiento de pago a la parte demanda pues se itera ésta ocurrió el 2 de julio de la presente anualidad, lo que de suyo permite colegir que con la presentación de la demanda se interrumpió la prescripción de la totalidad de las obligaciones acá exigidas lo que impide que la excepción planteada pueda prosperar.

8. Los anteriores razonamientos se consideran suficientes para declarar infundadas las excepciones de mérito analizada y, en consecuencia, se ha de ordenar seguir adelante con la ejecución, en la forma dispuesta en el mandamiento de pago.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VII. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR infundadas las excepciones de mérito planteadas por el extremo demandado, por las razones consignadas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante la ejecución conforme el mandamiento de pago librado.

TERCERO: Decretar la venta en pública subasta los bienes embargados al demandado y los que posteriormente se llegaren a embargar.

CUARTO: Practíquese la liquidación del crédito conforme lo normado en el artículo 446 del C. G. del P.

QUINTO: Condenar en costas de esta instancia a la parte demandada y a favor de la parte ejecutante. Para lo cual téngase como agencias en derecho la suma de \$3.535.788 m./cte.

Liquídense.

Notifíquese y cúmplase,⁷

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

Firmado Por:

**Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal**

⁷ Este proveído se notificó por estado No. 101 de 8 de septiembre de 2021.

Civil 019
Juzgado Municipal
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **52e7d8c26cf9eb54a7ddfb30b1830467d8a41a10e309aed0ac7a033f9375cfde**

Documento generado en 07/09/2021 12:20:58 PM